

Perspectiva

# La primera experiencia del pacto fiscal (2)

## Los actores y sus motivaciones

---

Edgar Gutiérrez  
Coordinador General IPNUSAC

### Resumen

Este artículo forma parte de un ensayo inédito escrito en 2005, que da cuenta de uno de los periodos decisivos de la historia reciente de Guatemala, cuando se negoció –sin llegar a cristalizar- un Pacto Fiscal, promovido con el fin de dotar al Estado de un sistema fiscal moderno y eficaz, como herramienta para emprender las tareas básicas de la cohesión social. En el artículo anterior se analizó a la comunidad internacional y el sector empresarial, en esta segunda parte el enfoque es sobre las representaciones sociales y el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que fueron parte de esa negociación.

### Palabras claves:

Pacto fiscal, gobierno Alfonso Portillo, MINUGUA, FMI, FRG, sistema bancario, sector empresarial.

---

### The first experience of the tax agreement (2) Actors and Motives

### Abstract

This article is part of an unpublished essay written in 2005, which accounts one of the crucial periods of the recent Guatemalan history, when a Tax Agreement was negotiated –without actually crystallize-, it was promoted to provide the State with a modern and efficient tax system as a tool to undertake the basic tasks of social cohesion. In the previous article was analyzed the international community and the business sector, in this second part of the approach it talks about the social representations and the government of the Frente Republicano Guatemalteco (FRG), which were part of that bargain.

### Keywords

Tax agreement, Alfonso Portillo government, MINUGUA, IMF, FRG, bank system, business sector.

## Organizaciones sociales

Desde el inicio del periodo democrático en 1986 una amplia constelación de organizaciones sociales y populares fue poblando el paisaje político de Guatemala. Sin embargo, a diferencia del movimiento social que bajo condiciones de represión y acoso floreció durante la década de 1960 y 1970, las nuevas organizaciones tendían a perder continuidad, se atomizaban y no lograban afirmar una identidad ideológica ni estrategias, tampoco su ascendencia sobre las masas.

De las centrales sindicales y sus dirigentes, que emergieron durante el gobierno de la Democracia Cristiana (DC), muy pocos seguían vigentes en este periodo. En cambio las organizaciones campesinas estaban ampliando sus ramificaciones y capacidad de movilización. Ciertos sindicatos más beligerantes que mantuvieron vínculos políticos con la URNG, entoncesalzada en armas, se iban desgranando progresivamente. Las coordinadoras campesinas adoptaron una posición más distante y crítica hacia la guerrilla, desde los 90 cuando se negociaban los Acuerdos de Paz. Lo mismo ocurrió con los grupos de derechos humanos. Ambos sectores coincidían en que los acuerdos alcanzados eran débiles y no guardaban garantías de transformación en el acceso a la propiedad rural, en un caso, y el desmantelamiento de aparatos represivos, el fin de la impunidad y reformas en el sistema de seguridad y justicia, en el otro.



Como norma, las organizaciones tendían hacia la cooperación internacional como medio de financiamiento para sostener sus cuadros directivos permanentes y planes de trabajo. En vez de nutrir la organización a través de aportes voluntarios, como había sido en las décadas anteriores, las bases, crecientemente empobrecidas, esperaban que su dirigencia les atrajera proyectos productivos, de infraestructura y capacitación, sea de la cooperación internacional o de programas gubernamentales. El aparato básico de la organización popular no tenía mayor diferencia con el de las ONG. Sus agendas de trabajo y la rendición de cuentas, entonces, priorizaban a los financistas, no a sus bases.

La preparación y negociaciones del Pacto Fiscal encontraron un conjunto de organizaciones sociales especializadas temáticamente, las cuales se venían forjando, desde la Asamblea de la Sociedad Civil a inicios de los años 90, en procesos de concertación y apoyo a la negociación de los Acuerdos de Paz. Las organizaciones se multiplicaban en la capital y en el interior del país. Entre ellas sobresalían las iniciativas mayas y de mujeres. Una parte guardaba relación con la URNG y se reagruparon cuando de la antigua

guerrilla, convertida en partido político, se desprendió en 2001, en plena tormenta del Pacto Fiscal, la ANN.<sup>1</sup>

Para la mayor parte de las organizaciones sociales el tema fiscal era un dato de la realidad importante, pero poco asequible, a diferencia del acceso a la tierra y las fórmulas de reforma agraria; la impunidad en derechos humanos; los salarios y el derecho de sindicalización. El tema remitía a enfoques técnicos, especializados; se le reconocía su relevancia en la lucha política, que se escamoteaba mediante componendas entre el Gobierno y el sector privado. Por eso las organizaciones populares tendían a identificarse sólo como víctimas de las cargas impositivas y, en consecuencia, las rechazaban. La más importante –y general- de las

---

1. La URNG estaba, en ese momento, dirigida por Rodrigo Asturias (Gaspar *llom*) y en ella permanecieron los antiguos cuadros guerrilleros del EGP, ORPA y militantes del PGT. La ANN pasó a ser encabezada por Jorge Soto (*Pablo Monsanto*) llevó consigo a los cuadros políticos de las FAR y algunos del EGP, entre ellos Amoldo Noriega, quien, durante el periodo de las negociaciones del Pacto Fiscal, fungió como coordinador de la CAAP, desempeñando un papel destacado. En términos generales la posición de los dirigentes de la izquierda que posteriormente pasaron a integrar la ANN fueron más afines al empresariado durante la negociación del Pacto Fiscal. De hecho la prensa reportó que en la campaña electoral de 2003, candidatos a diputados de la ANN recibieron algún apoyo financiero de empresarios individuales. En cambio la URNG era más distante del CACIF y llegó a simpatizar con algunas posiciones anti empresariales de Portillo. Una discusión sobre este punto se encuentra en Mayra Palencia, 2002:II.4.



reivindicaciones había consistido en reclamar un mayor peso de los impuestos directos, sobre rentas y patrimonio, frente al IVA.

Como el régimen fiscal y el poder tributario del Estado habían quedado como temas de las empresas y cámaras patronales,<sup>2</sup> la tecnocracia estatal y algunos políticos, las organizaciones sociales descansaban sus criterios en los insumos que podían proporcionarles algunos centros académicos –la Universidad de San Carlos e institutos privados de investigación- y en consignas generales que adquirirían estatus de principio ideológico: “Que pague más, el que más tiene”. También se reclamaba un manejo de los fondos públicos libre de corrupción y priorizado hacia los más pobres.

La CPPF, con el apoyo de centros académicos privados y universidades, inició desde el segundo trimestre de 1999 la pedagogía sobre el tema fiscal entre amplios grupos sociales en todo el país. Realizaron una verdadera labor de

---

2. Sobre todo las grandes corporaciones habían reclutado a los mejores cuadros especializados en auditoría pública y derecho tributario. Algunos de ellos, como Adolfo Menéndez Castejón, formaron parte de las delegaciones negociadoras del CACIF en el Pacto Fiscal.

apostolado.<sup>3</sup> La CPPF compartió con diversos sectores una serie de conceptos y marcos de políticas que posteriormente hilvanó como una propuesta de principios y compromisos respecto del balance fiscal, los ingresos del Estado, el gasto y la deuda públicas, la gestión del patrimonio público, la evaluación y el control, y la descentralización fiscal, que recibió el refrendo en el documento del Pacto Fiscal suscrito el 25 de mayo de 2000 por la sociedad civil y la sociedad empresarial.

Los grupos convocados por la CPPF constituían una sociedad civil en un sentido amplio, por su diversidad, heterogeneidad e intereses diferenciados. Las ONG, sobre todo, apuntalaron la capacidad propositiva del conjunto de organizaciones porque contaban entre sus integrantes con asesores técnicos, aunque pocos con experiencia de Estado.<sup>4</sup>

En la última semana de febrero de 2000, la “Coordinadora ¡Si, Vamos por la Paz!” se pronunció a favor de recuperar

---

3. Gamboa y Trentavizi, 2001.

4. Quizá el cuadro asesor más descollante era Ana Ordóñez de Molina, ministra de Finanzas Públicas durante el gobierno de Ramiro de León Carpio. Además, Mayra Palencia, antiguo cuadro del Ministerio de Finanzas Públicas, ahora volcada a la investigación académica. La URNG contaba con el economista Wilson Romero y el COS con Carlos Barreda.



la estabilidad macroeconómica, promover el crecimiento del PIB a los niveles sugeridos en los Acuerdos de Paz, la participación ciudadana en la toma de decisiones y darle un “enfoque humano” a los problemas financieros estructurales.<sup>5</sup> Los alcaldes indígenas, agrupados en la Asociación Guatemalteca de Alcaldes Indígenas, enfatizaron en la descentralización fiscal sugiriendo mecanismos para separar sus recursos del Gobierno Central, transformar los fondos sociales en activos de desarrollo municipal, sustituir los arbitrios por extracción de productos y los arbitrios fijos sobre actividades económicas en un impuesto uniforme para los gobiernos locales, y aprobar el Código Tributario Municipal.<sup>6</sup>

Así, los sectores sociales inauguraban su participación como entidades negociadoras en un complejo tema de Estado y de relaciones de poder. Su papel era refrendar principios de una estructura tributaria progresiva, liberada de privilegios y sesgos sectoriales, y promover la buena administración de los recursos públicos y la función redistributiva del Estado. Pero, además, servir de contrapunto a un sector empresarial recio y dominante en el manejo de los entretelones tributarios. No era una función estrictamente gremial, sino de acercamiento a la óptica de Estado, la que cumplía ese conjunto de

---

5. Diario *La Hora*, 23 de febrero de 2000.

6. Diario *Centro América*, 18 de marzo de 2000.

organizaciones sociales, donde los sindicatos y ligas campesinas, así como los pueblos indígenas y el movimiento de mujeres tuvieron un perfil muy bajo. Quizá por eso aquellas instancias más cercanas a un partido de izquierda, fueron los más descollantes.

## EL GOBIERNO DEL FRG

El FRG surgió en 1989, en torno a la figura del general ® Efraín Ríos Montt, como una iniciativa política de cuño conservador que reivindicaba valores morales en la función pública,<sup>7</sup> trazando puentes interclasistas entre sectores populares, clases medias y grupos empresariales. En la coyuntura en que el FRG comenzó a tomar cuerpo ocurría en Guatemala una agria disputa entre el CACIF y el gobierno de la DC por la reforma fiscal. Paralelamente se consolidaba el Partido de Avanzada Nacional (PAN), liderado por Álvaro Arzú. Ambos partidos fueron opciones empresariales ante el riesgo mayor: la reelección de la DC para el periodo 1991-96.

---

7. En el imaginario popular Ríos Montt encarnaba a un servidor público que había salvado a Guatemala del comunismo y que, aunque fanático religioso neopentecostal, había marcado como jefe de Estado un estilo probado de administración.



A Ríos Montt se le identificaba entre amplios sectores de la población como un caudillo capaz de imponer orden y combatir la corrupción. Internacionalmente, en cambio, su influencia despertaba repudio por los actos de genocidio contra pueblos indígenas durante su mandato.

“A mí la comunidad internacional me impidió ser Presidente”, dijo Ríos Montt al autor de este artículo el 1 de agosto de 2001, el día en que CACIF llamó a un paro nacional en repudio a la reforma tributaria. En realidad obispos de la Iglesia católica promovieron un discreto y efectivo cabildeo entre los constituyentes de 1985 para incluir un artículo en la Constitución que cerrara el camino a que Ríos Montt pudiera llegar de nuevo a la Presidencia. Y, efectivamente, el líder del FRG no pudo optar a la Presidencia en 1995 y 1999 por los dictámenes adversos de la Corte de Constitucionalidad (CC). Por eso postuló, en 1995, a Alfonso Portillo, quien venía de la DC.

El perfil de los votantes de Portillo/ FRG era: menor capacidad económica, baja escolaridad y residencia en las áreas rurales. Las campañas polarizaron al país. Portillo blandió un discurso de corte populista que ponía el acento en la lucha de clases, reivindicando a los más pobres. Eso despertó temores entre las elites y la comunidad

internacional. En 1999 algunos representantes diplomáticos no permanecieron neutrales en el proceso de electoral y favorecieron opciones rivales del FRG (PAN y ANN). ONG, activistas y funcionarios de Arzú les transmitieron sus temores que el triunfo del FRG representaba el retorno de una visión contrainsurgente. Los empresarios temían la vuelta del Estado intervencionista y de las mafias que les desafiaban desde la Inteligencia militar.

Los medios escritos, algunos manejados por el gran capital, aunque cuestionaron la prepotencia de Arzú y condenaron la corrupción de su gobierno, no estuvieron en favor del FRG y anticiparon un papel crítico del futuro gobierno. Por otra parte, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, sobre todo de aquellos llamados a remover las causas del conflicto, acumuló una presa de demandas sociales –incluyendo el acceso a la tierra- que las organizaciones populares no querían posponer. Habían dado un compás de espera de tres años.

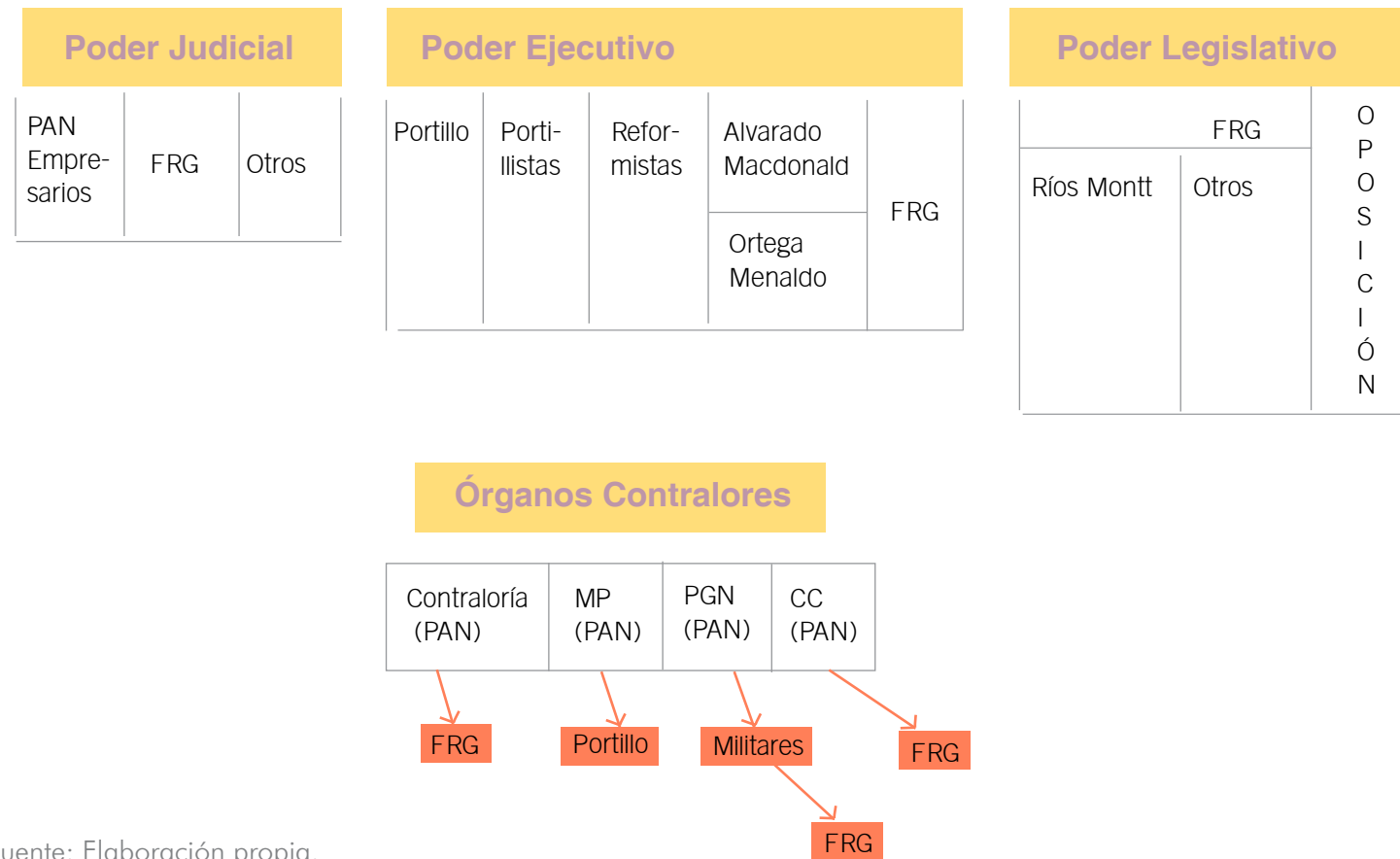
¿Con qué capacidades encontraba el FRG al Estado para enfrentar los retos políticos de su gestión? Desde 1987 se dictaron medidas encaminadas a disminuir la intervención del Estado en varias esferas, entre ellas la económica. El desmantelamiento del aparato público mermó capacidades



para responder a circunstancias que la población siempre demanda del Estado, como la garantía de precios básicos, combustibles, energía eléctrica, tarifas telefónicas, intereses bancarios etcétera. Son servicios ante los que la clase media se siente desprotegida y muy inclinada a criticar al gobierno.

Además, la administración de Arzú dejó los órganos de control del poder público (Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de Cuentas y Ministerio Público) en manos afines cuidando, de paso, las espaldas de sus funcionarios. Los cotos de poder en el Estado quedaron bien delimitados, como puede observarse en el diagrama 1.

Diagrama 1: División del poder en el Estado 2000 – 2001



Fuente: Elaboración propia.

Pero al momento de asumir la Presidencia, Portillo hizo más difícil la previsible caracterización de su administración: su discurso resumió un programa progresista de Gobierno que reivindicaba los derechos humanos y los Acuerdos de Paz (incluyendo la iniciativa del Pacto Fiscal), y en su gabinete configuró una constelación de cuadros reformistas.<sup>8</sup> Eliminó a todos los generales del Ejército y ante la imposibilidad legal para nombrar a un civil como ministro, optó por un coronel que se encontraba fuera del país. El presidente Portillo llamó a otros colaboradores independientes del FRG que le habían acompañado en la campaña, los llamados “portillistas”: Julio Girón, Rolando Sett, Mario Torres, Rubén Calderón, Mario Estrada, Guillermo Ruiz Wong, Luis Rabbé, René de León

8. Otilia Lux de Cotí (dirigente indígena, ex comisionada de la Comisión del Esclarecimiento Histórico), Ricardo Marroquín (ex comandante guerrillero), Miguel Ángel Reyes (ex integrante de la Comisión Política Diplomática de la URNG), Víctor Hugo Godoy (ex dirigente del Partido Revolucionario, ex Constituyente), Demetrio Cojfi (intelectual, dirigente indígena), Ricardo Alvarado (ex asesor de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos), Edgar Gutiérrez (ex director del REMHI), Pedro Palma Lau (ex comandante de ORPA), Fernanda Castejón (corresponsal de CNN). A ese grupo se unió, más adelante, Arturo Montenegro (ex funcionario de la CEPAL), Gabriel Aguilera (académico, ex vicescanciller), Leopoldo Sandoval (ex ministro de Agricultura, promotor de la reforma agraria), Catalina Soberanis (ex presidenta del Congreso, ex ministra de Trabajo de la DC, dirigente de organizaciones de mujeres), Lilly Caravantes (dirigente de mujeres), José Us (dirigente indígena). En el cuerpo diplomático estuvieron personalidades como Gert Rosenthal, Jorge Mario García Laguardia, Rómulo Caballeros, Marithza Ruiz de Vielman, Edmond Mulet, Antonio Arenales, Luis Padilla y Ronalthe Ochaeta. Ellos no participaron en la campaña electoral ni eran miembros del FRG.

Escribano, Rokaél Cardona y otros. En febrero incorporó a Lizardo Sosa, como presidente del banco central.

Tanto el discurso presidencial como estos nombramientos abrieron la puerta hacia la comunidad internacional, mientras el gobernante buscaba a través de la construcción de un Pacto de Gobernabilidad los canales de comunicación y acercamiento con varios sectores sociales.

En el periodo bajo análisis, el FRG tuvo los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud Pública, Economía, los fondos sociales y la estratégica Secretaría General (que sin embargo operó siempre a favor de la institucionalidad de la Presidencia, antes que del partido). Los ministros de Trabajo, Energía y Minas, el IGSS y el INFOM fueron cotos del Vicepresidente. La Gerencia de la Presidencia, la Secretaría de Asuntos Particulares, el ministro de Finanzas y el de Agricultura estaban bajo la influencia del banquero Francisco Alvarado. Tras bambalinas, y al inicio muy ligado a Alvarado se encontraba el general Francisco Ortega Menaldo, consejero del “nuevo” EMP, en donde Jacobo Salán y Napoleón Rojas eran los encargados de dirigir la seguridad del Presidente. La influencia del ministro de Comunicaciones, Luis Rabbé, nacía del poder de Ángel González (propietario de los canales de televisión abierta), en tanto que la ascendencia de Mario Estrada (diputado y a la





sazón secretario de SEDESOL) provenía de su propio caudal económico y político regional.

Cada uno de los actores centrales (Portillo, Ríos Montt, Alvarado Macdonald y Reyes López) contaba con operadores clave en las funciones estratégicas, como se aprecia en el diagrama 2.

En la negociación del Acuerdo Político del Pacto Fiscal, los dos operadores (el ministro de Finanzas, Manuel Maza, hasta junio, y el vicepresidente Francisco Reyes, hasta octubre de 2000) no alcanzaron a cristalizar un entendimiento, queriendo hacer valer el poder tributario del Estado. No obstante, al margen, un operador del FRG (el diputado Leonel Soto), que respondía entonces al general Ríos Montt, afinaba los entendimientos con el sector empresarial. El diagrama 3 ilustra las relaciones y resultados.

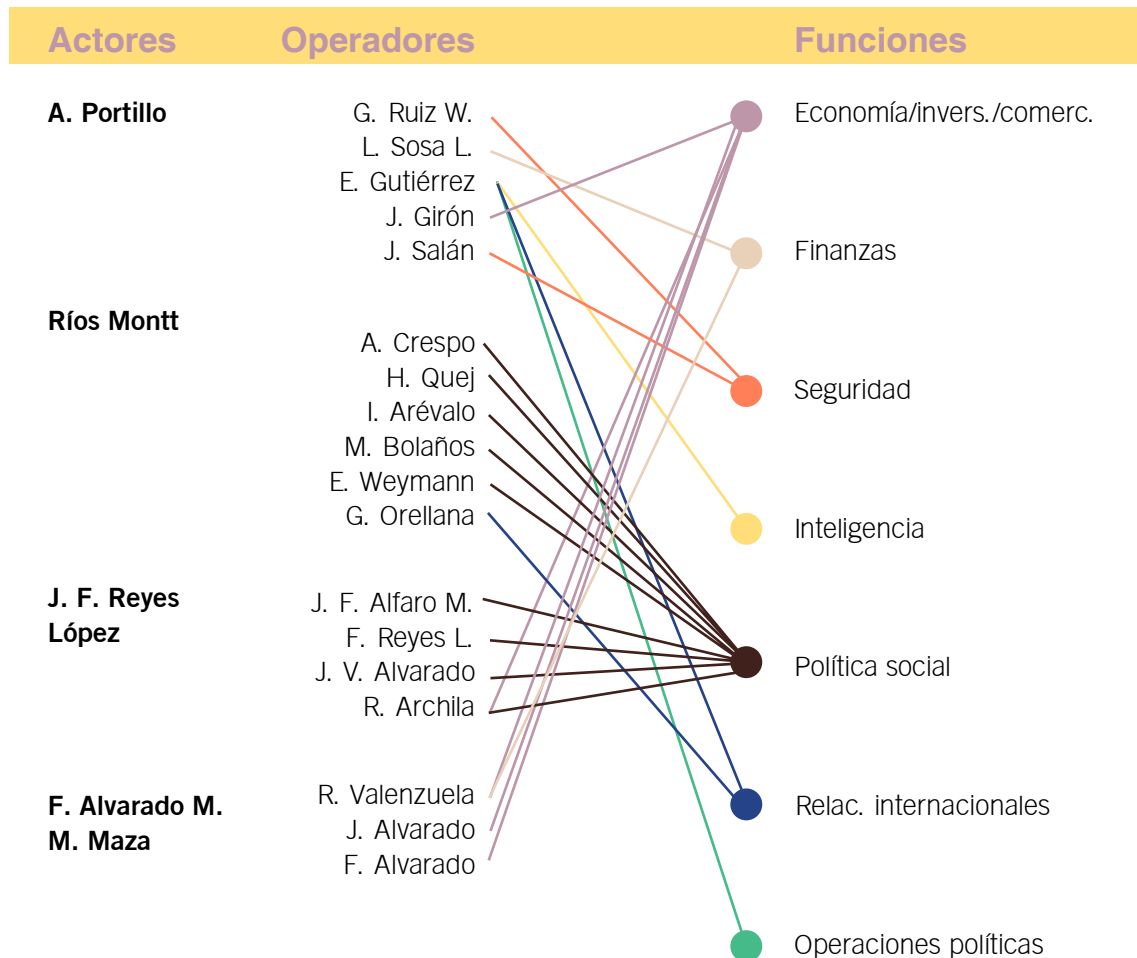
Tras un año de gobierno los focos de mayor desgaste eran el Ministerio de Comunicaciones, por las constantes denuncias de corrupción y el enfrentamiento de la TV con la prensa escrita; la influencia del ingeniero Alvarado en la política

económica y financiera; la sombra de ex oficiales en la seguridad del Presidente y su poder en nombramientos del Ejército, y el magro papel de la mayoría de gobernadores departamentales. A partir del segundo año las críticas se centraron en el vicepresidente y su hijo, nombramientos clave de Mario Estrada (Superintendencia de Administración Tributaria, Crédito Hipotecario Nacional) y el entorno de seguridad del Presidente, que manejaba el EMP (Jacobo Salán, Napoleón Rojas). Todo ello fue provocando desplazamientos y pugnas internas entre los distintos grupos.

El Presidente asignó los cargos y dejó que cada quien pusiera en marcha sus políticas de Gobierno. Los desencuentros entre los distintos grupos trataba de resolverlos a través de pláticas directas entre Ríos Montt, el vicepresidente López Reyes y el secretario de la SAE. La conformación del Gobierno no había sido satisfactoria para el FRG y eso se hizo evidente por las críticas públicas que desde el Congreso se hacían contra funcionarios del Ejecutivo. Y esa rispidez quiso subsanarse mediante reuniones entre diputados, ministros y secretarios, pero tales encuentros ayudaron poco a la integración de un equipo.



Diagrama 2: Actores y funciones de gobierno 2000 – 2001

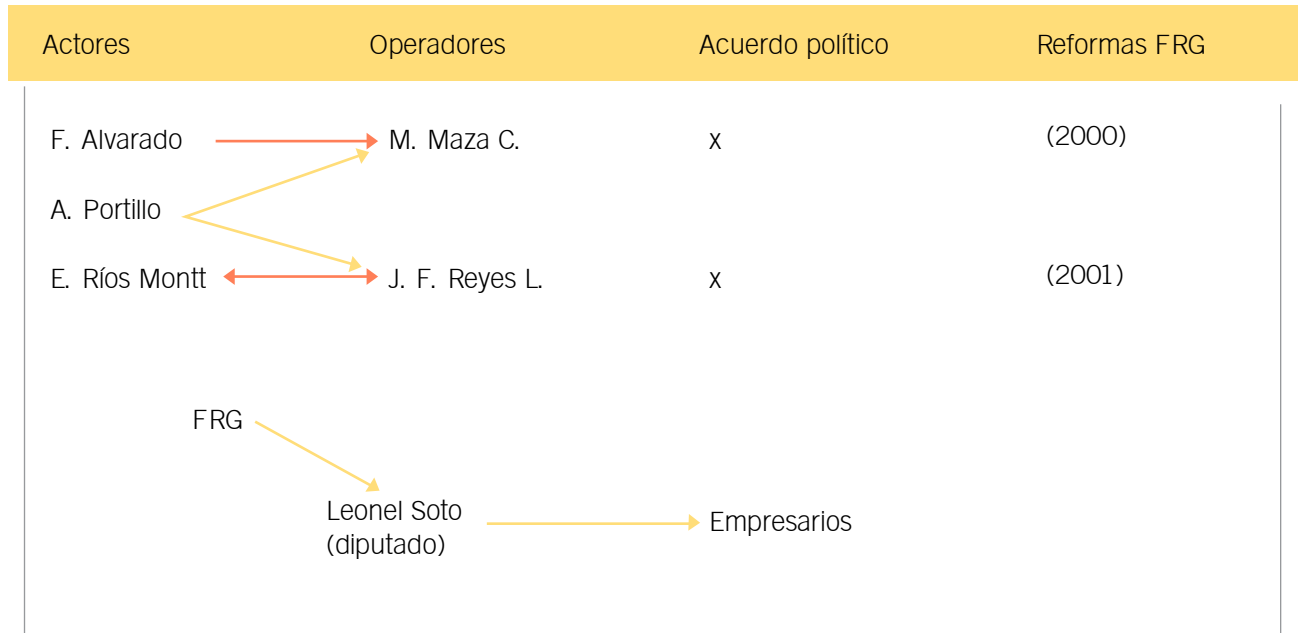


Fuente: Elaboración propia.

Todo indica que hubiese sido necesario un acuerdo sobre las políticas que se estaban tomando. La posición de la SEPAZ en torno al Pacto Fiscal y la política de derechos humanos manejada por COPREDEH, con Víctor Hugo Godoy, fueron los primeros desencuentros fuertes con el FRG, así como las disputas entre el EMP y la SAAS. De igual manera operaba la reconstrucción de la SAE fuera de manos militares.

Para el FRG aceptar la responsabilidad internacional del Estado en casos de violaciones de los derechos humanos, era condescender con las ONG que tanto atacaban a su líder. La reestructuración de la SAE, para sacarla del control militar, y la incidencia que eventualmente el Secretario tenía en el Presidente, también fue motivo de preocupación del partido. Sobre todo inquietaba la interlocución que los reformistas mantenían con la sociedad civil, los medios y la comunidad internacional, porque, según el Vicepresidente, se trataban temas en desmedro del FRG.

**Diagrama 3: Actores y operadores. Pacto Fiscal 2000 – 2001**



Fuente: Elaboración propia.

En el Congreso pronto se manifestó el afán de todo partido en el Gobierno de utilizar de manera clientelar las instituciones y los recursos públicos, lo cual generó enfrentamientos, incluso con dirigentes del FRG. Harris Witbeck (secretario Ejecutivo) y Mario Bolaños (ministro de Salud) fueron los primeros en ser cuestionados y boicoteados en sus presupuestos. En general el Congreso cercenó los recursos de importantes instituciones que no estaban dirigidas por el círculo cercano al FRG.

Las medidas económicas, a pesar de cierto pensamiento antioligarca compartido por todos los grupos, también generaron colisiones. El diagrama 4 ilustra los grados de acercamiento entre los distintos grupos de gobierno respecto de

los grandes temas de la agenda de Estado, así: en la política económica existía el mayor grado de acuerdo; en la política social existía acuerdo sobre su formulación, pero diferencias en cuanto a su aplicación; en la política de seguridad había tantos acuerdos como desacuerdos, y en la política cultural y de derechos humanos se identificaban los mayores desacuerdos.

En el Pacto Fiscal, el FRG no aceptaba el incremento al IVA y querían cargar la mano sobre los impuestos directos. Las medidas antimonopolio, antiprivilegio y de liberalización comercial, se vieron opacadas por la sombra del grupo Alvarado, que surgió como potencial beneficiario provocando duros ataques del sector privado, a la vez que críticas del FRG.

Los casos de corrupción denunciados sistemáticamente por los medios afectaron seriamente la legitimidad y estabilidad del Gobierno y se convirtieron en una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional.

### Referencias bibliográficas

- Amnistía Internacional (2003). Informe 2003. Londres, 28 de mayo.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2000). Documento país 2000. Guatemala.
- Banco Mundial (2000). Guatemala. *Tendencias fiscales y desafíos macroeconómicos*. 6 de febrero. (Mimeo.)
- Banco Mundial (1990). Guatemala. Informe del Sector Financiero. 26 de marzo.
- Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 1998). *El pacto fiscal*. Fortalezas, debilidades, desafíos. Santiago de Chile, abril.
- Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal (1999). *Hacia un Pacto Fiscal en Guatemala*. Guatemala, 29 de diciembre.
- Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz (2000). *Carta al Ministro de Finanzas Públicas*. Guatemala, 19 de junio.
- Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz (2000<sup>a</sup>). *Informe sobre el proceso del Pacto Fiscal y estrategia futura*. Guatemala, 1 de septiembre. (Mimeo.)
- Congreso de la República (1973). *Código de Comercio*. Decreto 17-73. Guatemala.



- Congreso de la República (1998). *Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria*. Decreto 1-98. Guatemala, enero.
- Corte de Constitucionalidad. *Resoluciones sobre temas tributarios y aranceles correspondientes a 2001, 2002, 2003*.
- Foro Nacional del Pacto Fiscal (2000). *Pacto Fiscal para un Futuro con Paz y Desarrollo*. Guatemala, 25 de mayo.
- Gamboa, Nuria y Bárbara Trentavizi (2001). *La Guatemala Posible, la senda del pacto fiscal*. Hombres de Maíz. Guatemala, abril.
- Gobierno de Guatemala y URNG (1996). *Acuerdos de Paz*. Universidad Rafael Landívar. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Serie Política. Tercera Edición. Guatemala.
- Grupo Ad hoc (2000). *Acuerdo Político para el financiamiento de la paz, el desarrollo y la democracia en Guatemala*. Guatemala, 20 de junio. (Mimeo.)
- Hellman, Joel S., Geraint Jones y Daniel Kaufman (2000). *Captura del Estado, corrupción e influencia en la transición*. Trabajo de Investigación de Políticas. Banco Mundial. Instituto del Banco Mundial. División Gobierno, Regulación y Finanzas. Washington, septiembre.
- Noriega, Arnoldo, Enrique Álvarez y Mario Chocoj (2001). *Cuando la sociedad guatemalteca se encuentra: La negociación política del Pacto Fiscal*. IPES. Guatemala, julio.
- Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (1998). *Guatemala Nunca Más. Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI)*. Guatemala, abril.
- Palencia Prado, Mayra (2002). *El Estado para el capital: La arena fiscal, manzana de la discordia entre el empresariado y el poder público*. FLACSO. Guatemala, agosto.
- Rosen, H. (1999). *Public Finance Irwin McGraw-Hill*, 5° edition, Boston.

